

Incoación de proceso inmediato. Efectos y suspensión de plazo procesal por causa de la COVID-19

1. Se tiene claro que el requerimiento de incoación de proceso inmediato, al igual que la acusación directa, sí suspende el plazo de prescripción de la acción penal.

2. Las suspensiones de los plazos procesales dispuestas mediante las resoluciones administrativas emitidas por el Poder Judicial y el Ministerio Público por causa del estado de emergencia sanitaria debido a la pandemia de la COVID-19 son de observancia obligatoria en el cómputo de los plazos.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, cinco de diciembre de dos mil veintidós

VISTOS: en audiencia pública¹, el recurso de casación interpuesto por la **Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima Norte** (folio 93) contra la sentencia de vista del veintisiete de julio de dos mil veintiuno (folio 81), expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que declaró infundado el recurso de apelación contra el auto del once de mayo de dos mil veintiuno y de oficio declaró fundada la excepción de prescripción de la acción penal seguida contra Mildred Katherine Cerna Portaro por el delito de conducción en estado de ebriedad, en agravio de la sociedad.

Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS.

CONSIDERANDO

I. Itinerario del proceso

Primero. Del requerimiento de incoación de proceso inmediato (folio 1 del expediente judicial) se advierte lo siguiente:

¹ Realizada a través del sistema de videoconferencia, donde existió una interacción visual y auditiva simultánea, bidireccional y en tiempo real, sin ningún obstáculo; además, no hubo necesidad de que las partes concurrieran, en forma física, a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia de la República.

- 1.1.** La imputación concreta contra Mildred Katherine Cerna Portaro es que el treinta de marzo de dos mil dieciocho, aproximadamente a las 4:05 horas, fue intervenida por personal policial en circunstancias en que se había producido un accidente de tránsito (despiste) a la altura de la avenida Alfredo Mendiola, cruce con la avenida Carlos Izaguirre (distrito de Los Olivos), cuando la citada se encontraba conduciendo el vehículo “moto lineal” sin placa de rodaje, con síntomas de ebriedad, por lo que fue conducida a la Comisaría PNP Sol de Oro.
- 1.2.** Mediante Disposición n.º 1, del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (folio 25), el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial de Lima Norte abrió investigación preliminar contra Mildred Katherine Cerna Portaro por el delito contra la seguridad pública-peligro común-conducción en estado de ebriedad, en agravio de la sociedad, investigación cuyo plazo fue ampliado a través de la Disposición n.º 2, del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (folio 30).

Segundo. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Lima Norte, mediante Resolución n.º 2, del once de mayo de dos mil veintiuno (fecha aclarada en el auto de vista), declaró improcedente el requerimiento de proceso inmediato solicitado por el representante del Ministerio Público en el proceso seguido contra Mildred Katherine Cerna Portaro como presunta autora del delito contra la seguridad pública-conducción de vehículo automóvil en estado de ebriedad, en agravio del Estado.

Tercero. Esta decisión fue apelada por el representante del Ministerio Público al culminar la audiencia de incoación de proceso inmediato

(folio 64). El juez de instancia, por Resolución n.º 3, del once de marzo de dos mil veintiuno (folio 65), resolvió conceder el recurso de apelación formulado por el representante del Ministerio Público contra la Resolución n.º 2, emitida en la misma fecha, y dispuso elevar el cuaderno incidental a la Sala Superior.

Cuarto. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en mérito a las facultades conferidas en el artículo 447, inciso 5 del Código Procesal Penal, relativas a la audiencia única de incoación del proceso inmediato, por Resolución n.º 1, del veintidós de julio de dos mil veintiuno (folio 71), resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público.

Asimismo, a través del auto de vista contenido en la Resolución n.º 2, del veintisiete de julio de dos mil veintiuno (folio 81), declaró, entre otros extremos, infundado el recurso de apelación presentado por el representante del Ministerio Público contra la Resolución n.º 2 y de oficio declaró fundada la excepción de prescripción de la acción penal seguida contra la precitada por el delito contra la seguridad pública-conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, en agravio de la sociedad, al amparo de los siguientes fundamentos:

2.7 Advertimos que estando a la naturaleza del delito imputado, que es un delito de mera actividad y de peligro abstracto, conforme lo señala el artículo 82 del Código Penal donde indica que un delito de comisión instantánea de mera actividad, el plazo de prescripción de la acción penal comienza a partir del día en que se consumó; siendo ello así, el plazo de prescripción de la acción penal en este caso se inicia el 30 de marzo de 2018.

En este sentido, como no se formalizó la investigación preparatoria sino solamente hubo disposiciones fiscales de diligencia preliminar y una ampliación de diligencia preliminar, incluso sin adecuación de la causa a las normas del Código Procesal Penal, estimamos que las actuaciones de la fiscalía que realizó cuando efectúa la disposición fiscal número uno y numero dos cursando notificaciones y oficios correspondientes, se produjo la interrupción de la prescripción de la acción penal conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Penal.

[...]

2.8 En ese sentido, el inicio del plazo de la prescripción de la acción penal para este delito imputado inició el 30 de marzo de 2018 y por las actuaciones del Ministerio Público se interrumpe el plazo, pero en todo caso no podría sobrepasar el plazo máximo más la mitad del plazo dispuesto. Ello nos remite al artículo 274, primer párrafo del Código Penal, que sería 3 años porque el plazo máximo es 2 años de pena privativa de libertad. En consecuencia, si estamos hablando de 3 años y teniendo en cuenta el cómputo de plazos conforme al calendario gregoriano, habiéndose iniciado la prescripción de la acción penal el 30 de marzo de 2018, esta prescribió el 29 de marzo de 2021. Si bien la fiscalía presentó su requerimiento de incoación de proceso inmediato físicamente ante el órgano judicial el 30 de marzo de 2021, ya lo había hecho cuando la acción penal habría prescrito.

2.9 Por otro lado, debemos mencionar que el Código Procesal Penal no legisla de manera taxativa que un requerimiento de incoación de proceso inmediato suspende los plazos de prescripción, a diferencia de lo que señala para la formalización de la investigación preparatoria en el artículo 339.1 del Código Procesal Penal que dispone: La formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal.

En ese sentido, también tenemos jurisprudencia de que podemos equiparar, por ejemplo, la acusación directa a los efectos de una formalización de la investigación preparatoria, toda vez que determina una formulación de cargos- hechos fácticos- de manera específica contra una persona imputada, empero, se señala en la Casación 347-2011 Lima, que esto tiene que efectuarse con la

comunicación formal al órgano judicial, porque el órgano judicial al tomar conocimiento emitirá su resolución en la que también deberá verificar que la acción penal está vigente para tener por comunicado sea la formalización de investigación preparatoria o en todo caso ante una acusación directa, y proceder a emitir la resolución que corresponda y a partir de ello estimar la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal.

Empero, este último supuesto, se da en tanto y en cuanto la acción penal estuviere vigente, lo que no resultaría aplicable a este caso ya que al momento que se incoa el proceso inmediato, que de alguna manera encontraría paralelo en un acusación directa porque se estaría formulando una imputación fáctica contra una persona investigada y frente al órgano jurisdiccional, ya cuando se presentó el requerimiento fue fuera de los tres años que indica la norma como plazo extraordinario de prescripción.

II. Motivos de la concesión del recurso de casación

Quinto. Este Tribunal Supremo, mediante la resolución del trece de mayo de dos mil veintidós (folio 45 del cuadernillo formado en esta instancia), concedió el recurso de casación excepcional propuesto por la TERCERA FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE LIMA NORTE por las causales previstas en los numerales 1 (si la sentencia o el auto han sido expedidos con inobservancia de algunas garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías) y 4 (si la sentencia o el auto han sido expedidos con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor) del artículo 429 del Código Procesal Penal. Se precisó lo siguiente:

- 5.1.** Se concede la casación por la causal del inciso 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal a fin de establecer si deben aplicarse las resoluciones emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sobre la suspensión de los plazos procesales durante el estado de emergencia nacional por la pandemia de

la COVID-19, si este factor se debe analizar al momento de contabilizar los plazos de prescripción y caducidad y, de no hacerlo, si esto afecta el debido proceso.

- 5.2.** Se concede la casación por el inciso 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal a fin de establecer si la disposición de incoación del proceso inmediato debe equipararse al de la formalización de la investigación preparatoria, a efectos de verificar la eventual prescripción, así como la contabilización del plazo de la prescripción en los procesos inmediatos y su incidencia en el deber de motivación.

III. Audiencia de casación

Sexto. Instruido el expediente, se señaló como fecha para la realización de la audiencia de casación el veintiuno de noviembre del año en curso (folio 54 del cuadernillo formado en esta instancia), la que se realizó con la intervención de los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes expusieron los argumentos propuestos en sus recursos de casación, con lo que la causa quedó expedita para emitir pronunciamiento; deliberada la causa se votó en mayoría, con el voto discordante de la señora juez suprema Carbajal Chávez.

IV. Fundamentos de derecho

Séptimo. Este Supremo Tribunal, como garante de derechos, principios, bienes y valores constitucionales y actuando como última instancia de la jurisdicción ordinaria, admitió el recurso de casación propuesto por el representante del Ministerio Público por los motivos precisados en los fundamentos 5.1. y 5.2.

Octavo. El proceso inmediato se encuentra regulado en el artículo 446 del Código Procesal Penal, que establece lo que sigue:

1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:
 - a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259;
 - b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160; o
 - c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes.
2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean necesarios ulteriores actos de investigación.
3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable.
4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente Código.

Noveno. En lo que respecta a la prescripción penal, el Tribunal constitucional ha señalado lo siguiente:

8. La prescripción de la acción penal tiene relevancia constitucional, toda vez que se encuentra vinculada con el contenido del derecho al plazo razonable del proceso, el cual forma parte del derecho fundamental al debido proceso.

9. (...) En efecto, conforme al artículo 82 del Código Penal el computo del plazo de prescripción se cuenta desde la fecha en que se consumó el delito (para el instantáneo) o desde el momento en que cesó la actividad delictuosa (en los demás casos). Como es de verse, la determinación de la prescripción de la acción penal requerirá previamente dilucidar la fecha en la que cesó la actividad delictiva o el momento de la consumación, lo que es competencia de la justicia ordinaria².

Décimo. Ahora bien, sobre la suspensión de la prescripción de la acción penal, el Acuerdo Plenario n.º 1-2010, señaló lo que sigue:

Sin embargo, la literalidad del inciso 1 del artículo 339 del Código Procesal Penal evidencia que regula expresamente una suspensión "sui generis", diferente a la ya señalada, porque afirma que la formalización de la Investigación preparatoria emitida por el Fiscal, como director y coordinador de esta etapa procesal, quien adquiere las funciones de las que actualmente goza el juez de instrucción, suspende el curso de la prescripción. Con la formulación de la imputación se judicializa el proceso por la comunicación directa entre el fiscal y el juez de la Investigación Preparatoria y culmina la etapa preliminar de la investigación practicada por el fiscal.

Undécimo. El Acuerdo Plenario n.º 3-2012/CJ-116 precisó que es pertinente y oportuno establecer un límite temporal para la duración de la suspensión de la prescripción de la acción penal, generada por la formalización de la investigación preparatoria. En adelante debe entenderse que la suspensión de la prescripción en el caso del artículo 339, inciso 1, no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción, más una mitad de dicho plazo.

² Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente n.º 03523-2008-PHC/TC/Apurímac (fundamento 8).

Duodécimo. Asimismo, mediante el Recurso de Casación n.º 902-2019/La Libertad, la Corte Suprema, en su fundamento sexto, estableció lo siguiente:

Es verdad que el Código Procesal Penal, específicamente, no mencionó que un efecto de la acusación directa sea la suspensión de la acción penal; sin embargo, es obvio que así corresponde encuadrarla, **al igual que la incoación del proceso inmediato** (ex artículo 447, numeral 6, del Código Procesal Penal). Lo relevante es que se trata de un acto de imputación fiscal (todas ellas, por lo demás) y que precisamente por ello, en tanto y en cuanto tiene un cierto nivel de concreción, genera automáticamente la suspensión de la prescripción de la acción penal, con una sospecha mayor, como es la sospecha suficiente, propia de la acusación (directa o no), es evidente que también se produce tal efecto o consecuencia jurídica. La incoación de proceso penal se ha producido con creces con la acusación directa y esta nota esencial es lo relevante para, superado un momento previo de posibles diligencias preliminares, dar por suspendido el plazo de prescripción penal [énfasis nuestro].

∞ La suspensión de la prescripción de la acción penal no está en función exclusiva del procedimiento preparatorio —o la etapa de investigación preparatoria— (el Código Procesal Penal no circunscribe el efecto suspensivo a esta fase procesal), sino que se proyecta a todo el trámite del proceso penal declarativo de condena. Su fundamento estriba en la necesidad de evitar la impunidad y garantizar la persecución penal, es decir, permitir a la autoridad penal, en general, concluir con todo el proceso penal hasta una sentencia firme. La Corte Suprema, en todo caso, para evitar actuaciones desproporcionadas de la autoridad penal y en atención a la prohibición del exceso, limitó pretorianamente el periodo de suspensión, según ya se expresó.

Decimotercero. Cabe precisar que el criterio antes referido fue ratificado por este Tribunal Supremo en el Recurso de Casación n.º 515-2020/Cajamarca, fundamento decimoquinto.

Decimocuarto. Ahora bien, conforme se ha expuesto en anteriores pronunciamientos, se tiene claro que el requerimiento de incoación de proceso inmediato, al igual que la acusación directa, suspende el plazo de prescripción de la acción penal; no obstante ello, en el caso de autos se debe determinar si la interposición de dicho requerimiento se presentó cuando la acción penal aún no había prescrito.

Decimoquinto. Respecto de la suspensión de plazos por la pandemia COVID-19, la Corte Suprema, mediante el Recurso de Nulidad n.º 616-2020/Puno, expedido por la Sala Penal Transitoria, ha establecido lo que sigue:

En conclusión, dada esta coyuntura excepcional es perfectamente válido y razonable que se hayan suspendido los plazos de prescripción de la acción penal, en virtud de la imposibilidad de ejercer el derecho de acceso a la justicia-universal e interdependiente-en ámbitos no relacionados a las garantías indispensables. Se debe garantizar, pues, la igualdad de condiciones de los imputados y víctimas en los conflictos jurídicos-penales para acceder a los servicios de justicia.

Decimosexto. En la misma línea, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la Casación n.º 748-2021/Huancavelica, señaló lo siguiente:

1.9. [...] Las normas sobre aislamiento dictadas por el Gobierno central, de cumplimiento obligatorio, no solo incidían en el traslado de los

ciudadanos, sino que afectaban ostensiblemente el normal desarrollo de las funciones del Ministerio Público y del Poder Judicial. En tal sentido ambas instituciones se vieron obligadas a emitir resoluciones administrativas sobre la suspensión de los plazos procesales, que no solo buscaban tutelar el correcto funcionamiento de estas entidades, sino también amparar el derecho de los justiciables.

1.10. Se trató de una circunstancia excepcional no atribuible al sistema de administración de justicia, que calza perfectamente en el concepto de caso fortuito o fuerza mayor, por lo cual está perfectamente justificado que en el cómputo de los plazos se descuenten los periodos de suspensión del plazo normado en dichas resoluciones administrativas, transcurridos los cuales se reanuda automáticamente el plazo sin que sea necesario solicitarlo expresamente.

Decimoséptimo. De modo que, según lo señalado, las suspensiones de los plazos procesales dispuestas mediante las resoluciones administrativas emitidas por el Poder Judicial y el Ministerio Público, en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, son de observancia obligatoria en el cómputo de los plazos, en el caso, los de prescripción.

Decimoctavo. El caso de autos corresponde al Distrito Fiscal de Lima Norte y, ubicándonos en dicho contexto, se emitieron las Resoluciones Administrativas n.ºs 115, 117, 118, 061, 062, 157 y 179 y 120-2020-CE-PJ, que suspendieron los plazos procesales desde el **dieciséis de marzo de dos mil veinte hasta el dieciséis de julio de dos mil veinte y del trece al veintitrés de octubre de dos mil veinte**; asimismo, mediante las Resoluciones Administrativas n.ºs 025, 014 y 023-2021-CE-PJ, se suspendieron los plazos procesales desde el **primero hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno** (se suspendieron un tiempo total de cinco meses y diez días).

Decimonoveno. En el auto de vista, la Sala Superior, al pronunciarse sobre la prescripción de oficio de la acción penal, indicó que esta habría operado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno; sin embargo, no se tuvo en consideración la suspensión de plazos con motivo de la pandemia, conforme a lo dispuesto por las resoluciones administrativas antes referidas, y se advierte que el plazo de prescripción de la acción penal recién habría operado en **septiembre de dos mil veintiuno**, dado que el requerimiento de incoación de proceso inmediato —del treinta de marzo de dos mil veintiuno— se presentó cuando la acción penal se encontraba vigente.

Vigésimo. Por otro lado, se observa que en el recurso de apelación el *ad quem* solo se limitó a verificar el extremo de la vigencia de la acción penal, sin ingresar a evaluar el fondo de la impugnación, por lo que dadas las facultades de este Supremo tribunal, actuando en sede de instancia, se debe ingresar a evaluar los agravios planteados por el Ministerio Público. En esa línea, se verifica que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 446 del Código Procesal Penal, en delitos como el que es materia de autos el fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del mencionado código. Sobre el particular, en el Acuerdo Plenario n.º 2-2016 se indicó que aparentemente la norma no exigiría los requisitos de evidencia delictiva y de ausencia de complejidad; empero, ello no es así porque la justificación constitucional del proceso inmediato —su fundamento material— se basa precisamente en ambas nociones. El delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, siempre que importe la intervención policial del

imputado conduciendo un vehículo motorizado en ese estado, con la prueba pericial respectiva, dentro de los marcos y con estricto respeto del artículo 213 del Código Procesal Penal, constituye un claro supuesto de “evidencia delictiva”. Es indiscutible que la realidad de la prueba antes de la intervención policial debe estar consolidada. Deben agregarse al requerimiento de incoación del proceso inmediato las actas y pericias que exige el citado artículo 213 del Código Procesal Penal.

Vigesimoprimer. En efecto, en el caso la procesada fue intervenida cuando conducía su vehículo menor y, efectuado el análisis respectivo, como se observa del informe pericial de dosaje etílico, se determinó que tenía 0.77 gramos de alcohol en la sangre. El cuestionamiento de la defensa se enfocó en alegar que la investigada no fue notificada a efectos de que pudiera hacer valer algún mecanismo de terminación temprana del proceso, sin que se judicialice, cuestionamiento que el Tribunal Superior consideró de entidad. Sin embargo, se dejó de lado que precisamente este tipo de procesos, por su propia naturaleza, son céleres y además se soslayó que, según lo establece en el inciso 3 del artículo 447 del Código Procesal Penal, en la audiencia de proceso inmediato las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda. De igual modo, en la audiencia de proceso inmediato, según se estipula en el inciso 3 del artículo 448 del Código Procesal Penal, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que corresponda. En tal sentido, no es atendible el agravio planteado por la defensa y, al cumplirse los requisitos para la solicitud del proceso inmediato, debe declararse

fundado, por lo que debe continuar el proceso, conforme a su estado.

Vigesimosegundo. Por todo lo expuesto, se concluye que el requerimiento de incoación de proceso inmediato presentado por el representante del Ministerio Público fue interpuesto cuando la prescripción de la acción penal no había operado —y el representante del Ministerio Público quedó facultado para perseguir y sancionar el delito atribuido a la procesada— y, como consecuencia de ello, a partir de dicha fecha (treinta de marzo de dos mil veintiuno) se suspendió el plazo de prescripción de la acción penal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, por mayoría y con el voto discordante de la señora juez suprema Carvajal Chávez :

- I. **DECLARARON FUNDADO** el recurso de casación excepcional interpuesto por la **Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima Norte** (folio 93) contra el auto de vista del veintisiete de julio de dos mil veintiuno (folio 81), expedido por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que declaró infundado el recurso de apelación contra el auto del once de mayo de dos mil veintiuno y de oficio declaró fundada la excepción de prescripción de la acción penal seguida contra Mildred Katherine Cerna Portaro por el delito de conducción en estado de ebriedad, en agravio de la sociedad.

- II. En consecuencia, **CASARON** el auto de vista del veintisiete de julio de dos mil veintiuno y, actuando en sede de instancia, **REVOCARON** el auto de primera instancia y **DECLARARON** fundado el requerimiento de incoación de proceso inmediato.
- III. **ORDENARON** que se remitan los actuados al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Lima Norte a fin de que se continúe con el trámite del proceso.
- IV. **DISPUSIERON** que la presente decisión sea leída en audiencia pública por intermedio de la Secretaría de esta Sala Suprema; que, acto seguido, se notifique a las partes apersonadas en esta instancia, se publique la decisión en el portal web del Poder Judicial y, cumplidos los trámites necesarios, se devuelvan los actuados al órgano jurisdiccional de origen, y que se archive el cuadernillo formado en esta instancia.

Intervino el señor juez supremo Coaguila Chávez por periodo vacacional de la señora juez supremo Altabás Kajatt.

S. S.

SAN MARTÍN CASTRO

LUJÁN TÚPEZ

SEQUEIROS VARGAS

COAGUILA CHÁVEZ

IASV/mirr



**CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA**

**SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.º 2019-2021
LIMA NORTE**